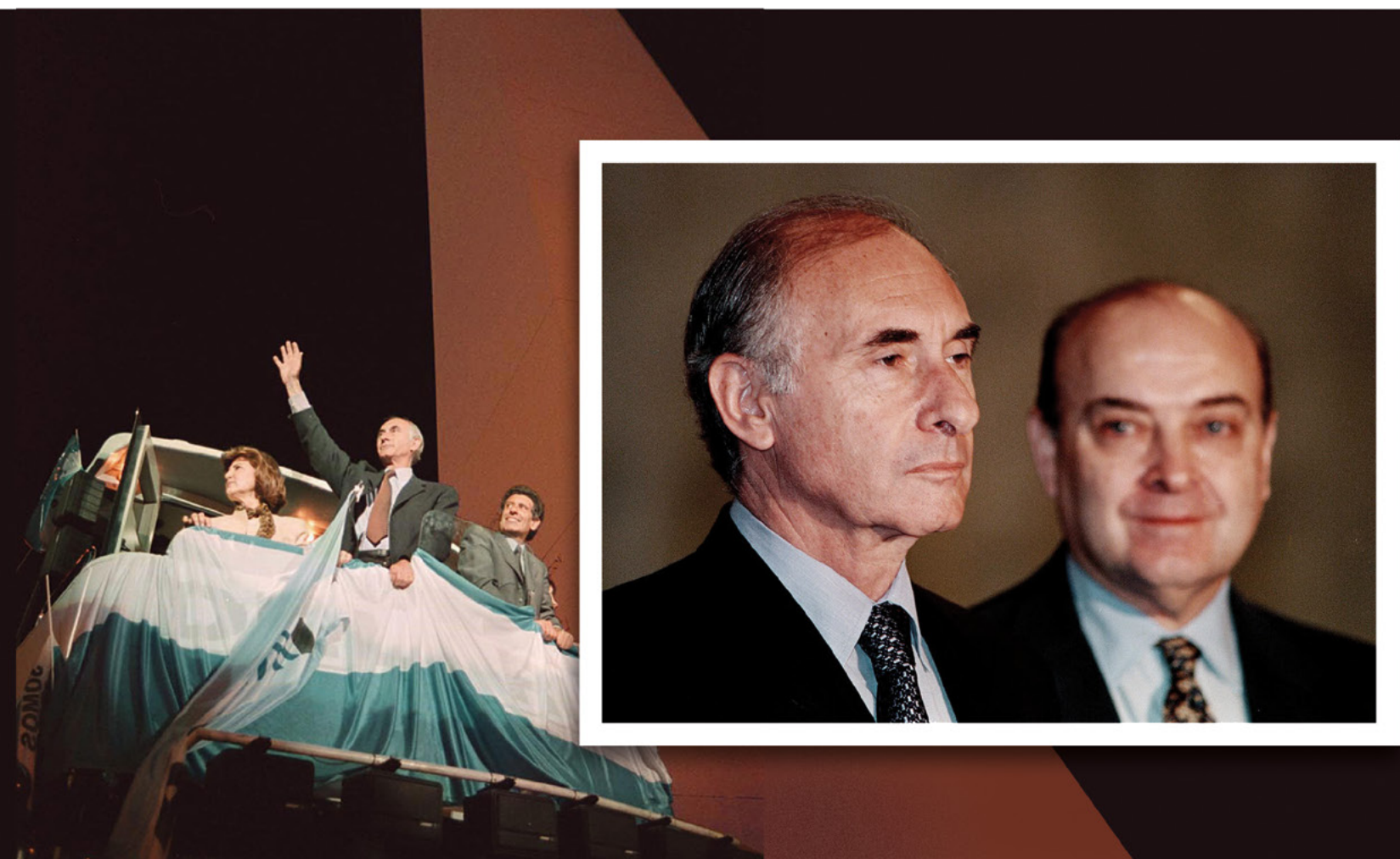




1999 - 2001

El sistema en crisis



La llegada de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación al gobierno, una coalición entre el radicalismo y el Frepaso (sectores progresistas del peronismo), traía encerrada una contradicción. Estos espacios se unieron para terminar con el menemismo pero, al mismo tiempo, no estaban dispuestos a terminar con su principal representación: el Plan de Convertibilidad. Y todo se profundizó cuando pusieron como ministro de Economía a su mentor, Domingo Cavallo.

Una de las premisas de la Alianza era poner fin a la corrupción menemista. Pero la coalición implosionó pronto cuando, apenas a cuatro meses de asumir, y en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Reforma Laboral, el sindicalista Hugo Moyano denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le reconoció que la ley iba a salir porque para algunos senadores peronistas que se oponían “tengo la Banelco”. Si bien la investigación en la justicia concluyó muchos años después con la absolución de los acusados al no encontrarse prueba del alegado soborno, el golpe interno fue tan duro que el 6 de octubre re-

nunció el mismísimo vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez.

Mientras la credibilidad del gobierno se caía a pedazos, la situación económica se profundizaba. La convertibilidad y los altos niveles de endeudamiento se mantuvieron, y se recurrió al ajuste para intentar sobrellevar las dificultades. Las medidas que tomó Cavallo no surtieron efecto y algunas propiciaron un clima de descontento particular y generalizado entre la clase media. La desocupación era incontrolable.

El modelo de economía abierta, que había sido implementado diez años antes, requería de permanentes flujos monetarios netos positivos con el exterior para su subsistencia. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Todo el esquema quedó sostenido hasta lo imposible con endeudamiento público.

Así, en enero de 2001, el país recibió un crédito por 40 mil millones de dólares para blindar su economía de los efectos financieros. El “blindaje” del FMI llegó con condiciones como la reforma previsional, la reducción del gasto público, la restructuración de organismos como la ANSES y el PAMI y la contracción de salarios, entre otras medidas de ajuste.

Sin embargo, ese “blindaje” solo permitió revertir el retiro de depósitos por un par de meses. A principios de marzo comenzaron a circular evidencias de que la Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, y la salida de depósitos se aceleró.

A pesar de este incumplimiento, el 19 de julio Domingo Cavallo firmó junto a su amigo David Mulford, número uno del Credit Suisse, un megacanje: reestructurar en forma voluntaria la deuda con los grandes bancos y fondos internacionales. Se consiguió una millonaria aceptación, pero a un costo altísimo, porque la tasa de interés superó el quince por ciento en dólares. Y la deuda creció en 2.255 millones de dólares. Después de estos acuerdos, la deuda pasó de 80 mil millones de dólares, a finales de 2000, a más de 120 mil millones de dólares luego del megacanje. Impagable para cualquier gobierno.

La crisis económica no tardó en precipitarse. En los últimos meses de 2001, las caídas de depósitos como consecuencia de la incertidumbre y las corridas alcanzaron al veintitrés por ciento del total del sistema financiero, cifra que se reducía a dieciocho por ciento en el caso del Banco Nación. Esta situación desembocó en la más amplia y profunda crisis de la historia, con aristas dramáticas en términos económicos y financieros, pero especialmente políticos y sociales.

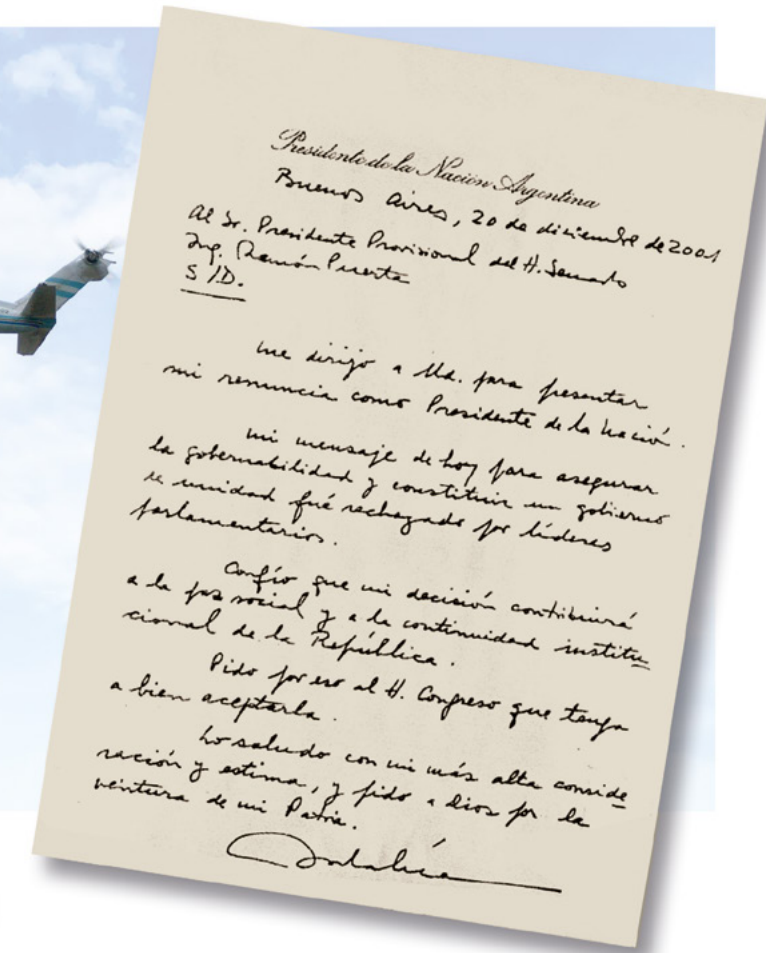
El año 2001 registró el tercer año consecutivo de recesión, con una caída de 4,4 por ciento del Producto Bruto Interno, más profunda durante el último trimestre. Fenómenos como la preferencia por la liquidez, salida de depósitos del público y formación récord de activos externos aumentaron, y fueron sostenidos en principio por el sistema financiero a través de cancelación de préstamos, liquidación de encajes y asistencia del BCRA, pero el ritmo frenético que adquirió esta dinámica (a fines de noviembre se retiraron el 2,5 por ciento del total de depósitos en un solo día) llevó a las autoridades a imponer un conjunto de restricciones para retiros de dinero y giros al exterior, conocido popularmente como “corralito”, que buscó impedir el agotamiento de reservas internacionales, lo cual aceleró la crisis cambiaria y bancaria hasta el colapso que forzó el cambio de gobierno y de régimen de política económica.

El breve gobierno de la Alianza se clausuró con una de las crisis más profundas que vivió nuestro país. A las dificultades económicas se sumó un masivo movimiento de protesta, cuyo punto más álgido de movilización contó como respuesta con una sangrienta represión por parte de las fuerzas estatales, con epicentro en Plaza de Mayo.

En él confluyeron los reclamos de dos grandes grupos: los sectores populares, víctimas principales de la marginación económica, que



El 19 y 20 de diciembre de 2001 el pueblo salió a las calles cacerola en mano y Fernando de la Rúa tuvo que renunciar.



se manifestaron con violencia en las calles de las ciudades del país y saquearon supermercados; el otro grupo, la clase media, se mostró a través de los “cacerolazos”, con descontento particular por la medida del corralito. En la tarde del 19 de diciembre, el presidente decretó el estado de sitio. La gente igual tomó las calles. Al día siguiente, casi en continuado, una multitud se acercó a la Plaza de Mayo para protestar y el gobierno respondió con una dura represión. Ese mismo día y en medio de las protestas, De la Rúa presentó su renuncia.

La de 2001 fue, como otras crisis de la historia del país, económica y política al mismo tiempo. No solo se hicieron evidentes los límites del modelo económico implantado desde fines de los años 80 y los problemas de la convertibilidad, sino que a esto se sumó un fuerte descontento social respecto del sistema político en general, que quedó expresado en la consigna que se escuchaba en las calles: “que se vayan todos”.

Así describe la crisis la Memoria del Banco de 2002: “El PBI a precios constantes se derrumbó 10,9 por ciento (caída similar a la registrada en 1914 y superior a la de 1931 y 1932). El desempleo alcanzó en mayo una tasa de 21,5 por ciento para el total de conglomerados urbanos, y la proporción de la población por debajo de los niveles de pobreza e indigencia superó los niveles de la hiperinflación de fines de



los años 80. Las restricciones al retiro de efectivo, la indisponibilidad de los depósitos y la cesación de pagos de la deuda pública nacional y provincial desatada a fines de 2001 modificaron y condicionaron el escenario en el que debieron desarrollar sus actividades las entidades del sistema financiero”.

El drenaje de depósitos de 2001 fue mayor al veinte por ciento. Mientras el tipo de cambio trepó hasta cuatro pesos, se sucedieron largas colas en los bancos para retirar fondos y/o adquirir dólares, mientras el Poder Judicial recibió miles de demandas de clientes que exigían recuperar sus activos; se quebró la cadena de pagos, hubo fuertes alzas en las moras e irregularidad de cartera, empeoraron los indicadores de solvencia y se produjo un fuerte descalce entre depósitos y préstamos. La caída de depósitos generó severas restricciones al crédito por falta de liquidez.

En este contexto, el Banco de la Nación Argentina ocupó un rol propio de la banca pública. Profundizó su perfil de entidad de prestaciones universales, con énfasis en las PyMEs, en muchos casos con condiciones especiales de tasas y/o garantía. Algunos ejemplos de este tipo de medidas fueron el fideicomiso productivo, las acciones de reconversión productiva regional, la puesta en marcha de Nación Leasing y Nación Factoring para

capital de trabajo, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –FONA-PyMEs–, entre otras, y también en el segmento cooperativas de primer y segundo grado, tanto agropecuarias como de servicios.

El Banco llevó adelante una transformación interna de tecnologías y sistemas que le permitieron unificar seis distintas plataformas informáticas a una consolidación de cuentas de cliente único. Además, cambió su Carta Orgánica y reorganizó su estructura (creó dos Subgerencias Generales Principales, una en Negocios y otra en Administración y Control), lo que mejoró su operatividad. Asimismo, el Banco jugó un importante rol social, tanto en la atención de públicos especialmente afectados por la crisis, como era el caso de jubilados y pensionados, como también en la recuperación de la legitimidad de la actividad de intermediación financiera, luego de la gran crisis de credibilidad que sufrió el sistema bancario. Esto implicó, entre otras acciones, involucrarse en programas sociales, incorporando incluso operativos en territorio para alcanzar a la población no bancarizada.

En medio de semejante contexto de crisis, nada fue suficiente. La Argentina estuvo al borde de su disolución. Era más que una crisis, era un caos. Sin gobierno, el poder se trasladó a las asambleas barriales y a los piquetes. En ambos el grito seguía siendo “que se vayan todos”. ■

